CAPACIDAD DE OBRAR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

Con independencia de doctrinas discrepantes, puede llegarse a las siguientes conclusiones:

1°. Todas las personas jurídicas legalmente constituidas tienen capacidad jurídica, y, por tanto, plena aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones.

2°. En cuanto a la capacidad de obrar, deberíamos distinguir:

a/. Personas jurídicas de interés público (que no es lo mismo que personas jurídico-públicas), es decir, aquellas que persiguen un fin de interés general, por ejemplo, asociaciones culturales o fundaciones privadas. En tales casos, en aplicación del art. 38.1 C.c., podríamos entender que si por ley o por sus estatutos, reglas de la fundación, carta fundacional, otra norma, por la que se regulen, tienen limitada su capacidad de obrar (por ejemplo, diciendo que la fundación, por su esencia, se limita a la actividad de X) esta limitación será plenamente efectiva, de forma que, aun siendo sujetos del Derecho, no podrá decirse que tengan capacidad para realizar cualquier tipo de acto o contrato. No es aquí problema de si sus órganos están o no legitimados para actuar en determinado negocio, sino si la persona jurídica de interés general tiene capacidad para actuar fuera de la actividad en la que promueve tal interés. Aún así, sin duda, habrá que reconocerle capacidad de realizar los llamados actos neutros (es decir, aquellos que no formando parte de la actividad esencial se dirigen a obtener o posibilitar aquélla). Y esto nos lleva a los eternos problemas, por ej.: ¿La Fundación de Ayuda al Disminuido tiene capacidad para especular con valores bursátiles con ánimo de lucrarse en esta especulación? ¿Y si el lucro obtenido en la Bolsa lo destina a un Hospital para minusválidos?

b/. Personas jurídicas de interés particular: Es decir, las que el Código denomina asociaciones civiles, mercantiles o industriales (arts. 35.2° y 36 C.c.). Éstas son las sociedades civiles y mercantiles, de las que puede afirmarse que tienen una capacidad de obrar plena, sin restricciones iniciales, de forma que, a priori, pueden realizar toda clase de actos y contratos. (El problema, según veremos, será el de determinar los órganos legitimados para realizar determinados actos).

Y en ellas puede distinguirse:

1°. Fin social último: Conforme al 1665 C.c., para las sociedades civiles, y 116 C.com., para las mercantiles, la finalidad social última es la obtención de lucro. Por tanto, no serán estructuralmente admisibles, por contrarias a la esencia del contrato de compañía, las normas sociales, o incluso los acuerdos de sus órganos, que se separan de esta finalidad lucrativa.
Última, en el bien entendido de que tal apreciación debe hacerse desde una perspectiva teleológica de conjunto, no enjuziando actos o comportamientos societarios aislados.

2º. El objeto social: Es aquella actividad o conjunto de actividades que constituye el giro o tráfico ordinario de la sociedad, y por medio de las cuales se persigue el fin social último de obtención de lucro. Como consecuencia de este concepto, en el objeto social no se podrán incluir actividades que sean contrarias a este fin social (por ej. es ilegal una S.A. cuyo único objeto social sea enviar donativos a África). Ahora bien, este punto puede matizarse, como ha hecho la DGRN, en R. 22.11.91, admitiendo que en el objeto social se incluyan determinadas actividades de carácter benéfico o gratuito, siempre que tengan un carácter médico y no entorpezcan en nada la consecución de la finalidad lucrativa a la que deben tender las actividades consignadas en el objeto social (en el caso resuelto se admite que la Junta General pueda determinar la aplicación anual de una parte de los beneficios a determinadas fundaciones, en cumplimiento de "deberes no exigibles de solidaridad social").

¿Qué son actos contrarios al objeto social? Si el objeto social es un conjunto de actividades o ramas de actividad desarrolladas por la empresa, parece más apropiado clasificar los actos societarios en actos comprendidos dentro del objeto social y actos no comprendidos dentro del mismo. Todos los actos comprendidos dentro del objeto social